

4. Negociaciones de paz en Asia

- Durante 2022 hubo 10 negociaciones de paz en Asia, el 26% del total de las negociaciones en el mundo.
- El Gobierno de Pakistán y el grupo armado talibán TTP llevaron a cabo un proceso de diálogo durante varios meses, que finalizó en noviembre con la retirada del TTP de la negociación.
- En el sur de Filipinas, la implementación del acuerdo de paz de 2014 avanzó sustancialmente, tanto en el desarrollo institucional de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, como en la desmovilización de combatientes del MILF.
- Tras casi dos años de parálisis en las negociaciones, en 2022 el Gobierno de Tailandia y el BRN retomaron el diálogo y alcanzaron algunos acuerdos.
- Los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y de la Región Autónoma de Bougainville alcanzaron un acuerdo en las negociaciones sobre el futuro estatus político de Bougainville, pero posteriormente las relaciones entre ambas partes se deterioraron y el diálogo se interrumpió.
- El diálogo entre ASEAN y la Junta Militar de Myanmar para el retorno de la democracia al país continuó estancado.

En este capítulo se analizan los principales procesos y negociaciones de paz en Asia durante 2022, tanto las características y tendencias generales de las negociaciones como la evolución de cada uno de los contextos en el continente a lo largo del año, incluyendo referencias a la agenda de género, paz y seguridad. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se identifican los países de Asia que albergaron negociaciones de paz durante 2022.

Tabla 4.1. Resumen de los procesos y las negociaciones de paz en Asia en 2022

Procesos y negociaciones de paz	Actores negociadores	Terceras partes
Corea, RPD – Corea, Rep. de	Corea del Norte, Corea del Sur	--
Corea, RPD – EEUU	Corea del Norte, EEUU	--
Filipinas (MILF)	Gobierno, MILF, Gobierno interino de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán	Malasia, Third Party Monitoring Team, International Monitoring Team, Independent Decommissioning Body
Filipinas (NDF)	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)	Noruega
India (Assam)	Gobierno, ULFA-PTF, ULFA-IAANLA, AANLA (FG), BCF, BCF (BT), STF, ACMA, ACMA (FG) y APA	--
India (Nagalandia)	Gobierno indio, NSCN-IM, NNPG: GPRN/NSCN (Kitovi Zhimomi), NNC, FGN, NSCN(R), NPGN (Non-Accord) y NNC/GDRN/NA, ZUF	--
Myanmar	Gobierno; grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF, NMSP y LDU; grupos armados no adheridos al NCA: UWSP, NDAA, SSPP/SSA-N, KNPP, NSCN-K, KIA, AA, TNLA, MNDAA	China, ASEAN
Pakistán	Gobierno, TTP	Afganistán
Papúa Nueva Guinea (Bougainville)	Gobierno, Gobierno Autónomo de Bougainville	ONU
Tailandia (sur)	Gobierno, BRN	Malasia

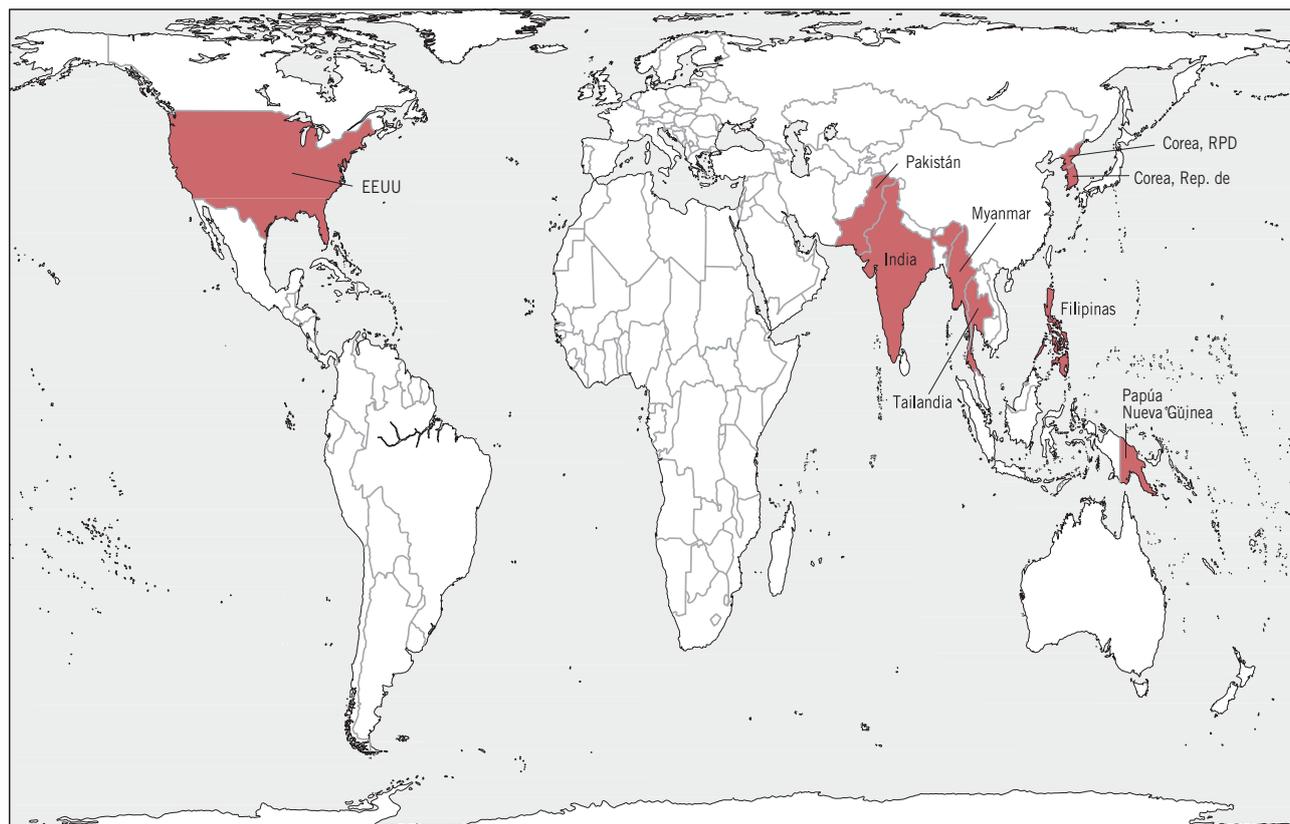
Las negociaciones de paz marcadas en negrita son descritas en el capítulo.
 -- No existen o no hay constancia pública de la existencia de terceras partes.

4.1 Negociaciones en 2022: tendencias regionales

Durante el año 2022 tuvieron lugar **10 negociaciones de paz en Asia**, el mismo número que el año anterior.

Esta cifra se mantuvo, ya que, aunque cabe destacar la finalización de las negociaciones de Afganistán, rotas

Mapa 4.1. Negociaciones de paz en 2022 en Asia



■ Países con procesos y negociaciones de paz en Asia en el año 2022

tras la retirada de las tropas internacionales del país y la caída del Gobierno afgano, se inició un nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno de Pakistán y el grupo armado talibán TTP, aunque este se interrumpió a finales de año por la retirada del TTP de las conversaciones. Cuatro de las negociaciones se desarrollaron en el Sudeste Asiático – Filipinas (MILF y NDF), Myanmar y Tailandia (Sur)–, tres en Asia Meridional –India (Assam y Nagalandia) y Pakistán–, dos en Asia Oriental (RPD Corea- Rep. de Corea y RPD Corea-EEUU) y una en la región del Pacífico –Papúa Nueva Guinea (Bougainville)–. De la misma manera que sucediera en años anteriores, la mitad de las negociaciones eran relativas a la resolución de conflictos armados activos, aunque con diferentes grados de violencia y enfrentamientos entre las partes –Filipinas (MILF y NDF), Myanmar, Pakistán y Tailandia (sur)–, mientras que la otra mitad se trataba de casos de tensiones de carácter sociopolítico, tanto de carácter interno como interestatal –RPD Corea- Rep. de Corea y RPD Corea-EEUU, India (Assam y Nagalandia) y Papúa Nueva Guinea (Bougainville).

Respecto a los **actores que protagonizaron los diferentes procesos de diálogo**, cabe destacar la presencia de los respectivos Gobiernos en todas ellas y la participación de grupos armados de oposición en todas las que transcurrieron en contextos de conflicto armado. Así, los Gobiernos de Pakistán, Filipinas, Myanmar y Tailandia dialogaron en diferentes formatos con grupos armados de diferente índole. Cabe señalar que si bien algunas de

las interlocuciones se produjeron de forma directa entre los grupos insurgentes y los Gobiernos involucrados en cada conflicto, como fue el caso del diálogo entre el Gobierno de Pakistán y el TTP, el Gobierno de la India y el NSCN-IM o el BRN y el Gobierno de Tailandia, en otros escenarios las conversaciones se produjeron a través de organizaciones políticas vinculadas y que actuaron en representación de la insurgencia, como el caso de Filipinas, en el que Manila negociaba con el National Democratic Front (NDF) en representación del Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el NPA.

En otros contextos, las negociaciones fueron protagonizadas únicamente por Gobiernos, como en el caso de las negociaciones interestatales que tuvieron lugar entre los Gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur así como entre Corea del Norte y EEUU. En otros contextos las interlocuciones tuvieron lugar entre Gobiernos centrales y regionales, como fue el caso de las negociaciones entre el Gobierno de Filipinas y el Gobierno regional de la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán y el de las negociaciones entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Gobierno regional de Bougainville. En el caso de Nagalandia, si bien no fue un actor negociador, el Gobierno del estado se implicó en el impulso del proceso, y diferentes actores políticos y parlamentarios también han jugado un importante papel para promover una solución negociada al conflicto. Así pues, actores gubernamentales de instancias descentralizadas tuvieron un papel relevante

en varios de los procesos negociadores en Asia, en consonancia con las características de los conflictos que se trataba de resolver. Las cuestiones relativas a la autonomía, autodeterminación, independencia, encaje territorial o reconocimiento identitario de diferentes minorías nacionales, fueron algunos de los ejes centrales de disputa de gran parte de los conflictos de la región, como los casos de India (Assam y Nagalandia), Filipinas (MILF), Myanmar, Papúa Nueva Guinea (Bouganville) y Tailandia (Sur), y de ahí la importancia de la participación de actores políticos de diferentes niveles administrativos.

El papel de las **terceras partes** en los procesos de paz en Asia se caracterizó por ser más reducido que en otras regiones y un 40% de las negociaciones se desarrollaron sin que el diálogo entre las partes en conflicto recibiera el acompañamiento de actores externos. Así fue en los procesos en los estados indios de Assam y Nagalandia, donde la interlocución se produjo de forma directa entre grupos armados y Gobierno, y en las negociaciones interestatales entre las dos Coreas y entre Corea del Norte y EEUU. Además, las negociaciones que sí contactaron con apoyo externo se caracterizaron también por una presencia más reducida de terceras partes en diferentes roles, ya que en gran parte de procesos de paz únicamente había uno o dos actores facilitando el diálogo.

Así sucedió en las negociaciones entre Filipinas y el NDF, que tuvieron lugar con el apoyo de Noruega; entre el Gobierno de Pakistán y el TTP, con la facilitación del régimen talibán de Afganistán; en el caso de las negociaciones entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y la Región Autónoma de Bouganville, con el acompañamiento de Naciones Unidas; en las negociaciones en Tailandia con el grupo armado de oposición BRN, con la facilitación de Malasia; o Myanmar, donde China trató de impulsar las negociaciones entre el Gobierno y diferentes grupos armados étnicos y ASEAN mantuvo contactos con la Junta Militar para resolver la crisis política que atraviesa el país desde el golpe de Estado de 2021. El único caso en el que el acompañamiento por parte de terceras partes estuvo conformado por una red de diferentes actores e instancias facilitadoras fue el de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Filipinas y el grupo armado MILF. En este caso, los actores involucrados en la fase actual de aplicación del acuerdo estuvieron organizados a través de diferentes equipos de coordinación del trabajo de supervisión y acompañamiento, como el Third Party Monitoring Team –encargado de supervisar la implementación de los acuerdos firmados entre el MILF y el Gobierno–, el International Decommissioning Body –conformado por Turquía, Noruega, Brunei y personal local de Filipinas, para supervisar la desmovilización de 40.000 ex combatientes del MILF– y, finalmente, aunque con un menor protagonismo en la fase de implementación del acuerdo de paz, el International Contact Group –conformado por cuatro Estados (Japón, Reino Unido, Turquía y Arabia Saudita) y por cuatro ONG internacionales (Muhammadiyah, The Asia Foundation, el Centre for Humanitarian Dialogue y Conciliation Resources).

Las terceras partes jugaron un papel más reducido en los procesos de paz en Asia que en otras regiones

El papel de las **organizaciones internacionales o regionales** en la facilitación de procesos de paz en Asia fue menor que en otras regiones, en el que organizaciones como Naciones Unidas jugaron un papel fundamental en la facilitación de negociaciones de paz. En Asia cabe destacar el rol de ASEAN promoviendo una salida a la crisis política en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021, aunque por el momento sin éxito. Naciones Unidas tuvo también un papel en la facilitación del proceso de diálogo entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y la Región Autónoma de Bouganville. Además, Naciones Unidas también acompañó en diferentes iniciativas vinculadas a la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad, en procesos como el de la implementación del acuerdo de paz en la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, con un programa de reintegración de mujeres combatientes del MILF. La finalización del proceso de paz en Afganistán conllevó una disminución del papel de los organismos internacionales en la promoción de la construcción de la paz en la región, ya que este país había concentrado buena parte de los esfuerzos e intervenciones internacionales en la zona, tanto por la presencia militar extranjera, como por el destacado papel jugado por organizaciones como Naciones Unidas o la UE.

Respecto a la **evolución** de las negociaciones de paz en el continente asiático, cabe señalar que aunque durante el año se produjo la reactivación de varios de los procesos que en años anteriores habían estado estancados, también varios de ellos sufrieron una evolución negativa durante el transcurso del año, que llevó al estancamiento o interrupción de la interlocución entre los actores negociadores. Este fue el caso de las negociaciones entre el grupo armado talibán TTP y el Gobierno de Pakistán, en el que el diálogo iniciado con la facilitación del Gobierno talibán de Afganistán, acabó con la retirada del TTP y una escalada de violencia. En otros contextos como Papúa Nueva Guinea, el deterioro en las relaciones entre negociadores conllevó la postergación de las negociaciones, si bien a inicios del año se habían producido importantes avances, como un acuerdo relativo a la finalización del proceso de referéndum y la puesta en marcha de modificaciones constitucionales. En Nagalandia, la reactivación de las negociaciones no supuso que se logaran avances significativos, y un año más se consolidó el estancamiento y falta de acuerdo entre las partes en los aspectos cruciales y al mismo tiempo más complejos de la negociación. En lo que respecta a las relaciones entre las dos Coreas, estas sufrieron un importante deterioro tras el cambio de Gobierno en Corea del Sur, lo que impidió cualquier tipo de avance en el diálogo. Ni siquiera se registraron avances en aspectos como el reencuentro de familias separadas por la guerra de Corea de 1950, que había sido un tema en el que se habían constatado acercamientos en momentos anteriores del proceso. En Myanmar tampoco se produjeron avances significativos ni en el diálogo entre el Gobierno con algunos grupos insurgentes ni en los contactos de ASEAN con la Junta

militar, y la implementación del consenso de cinco puntos para solventar la crisis continuó paralizada. En clave positiva, cabe destacar el acuerdo entre el Gobierno indio y ocho grupos armados adivasis del estado de Assam para su desmovilización, con contrapartidas políticas y de reconocimiento de derechos a la población adivasi, así como los avances en el proceso de paz en Tailandia, donde a pesar de la persistencia de la violencia, se lograron avances importantes en la negociación.

En lo que respecta a la aplicación de la **agenda género, paz y seguridad** y la participación de las mujeres en los procesos de paz, se constataron pocos avances significativos y las mujeres continuaron excluidas de la mayoría de negociaciones de paz. Este fue el caso de las negociaciones en Assam y Nagalandia en la India, en Pakistán, las dos Coreas, las negociaciones con el NDF y el Gobierno de Filipinas, Myanmar y Papúa Nueva Guinea (Bougainville), donde solo se constató la participación de las mujeres en algunos espacios vinculados a las negociaciones. La agenda género, paz y seguridad continuó sin ser considerada como un eje clave en la mayoría de negociaciones de paz, a pesar de los esfuerzos de movilización e incidencia de las organizaciones de mujeres en diferentes contextos del continente. No obstante, en algunos de los casos analizados sí se produjeron algunos avances significativos. Este fue el caso de las negociaciones de paz en Tailandia (Sur), donde el Gobierno nombró a una mujer como representante especial en las negociaciones con el BRN, con el mandato de promover el papel de las mujeres en el proceso. Por otra parte, en el caso de las negociaciones para la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Filipinas y el MILF, y considerado uno de los procesos en el que ha habido una mayor inclusión de la perspectiva de género, se constataron aumentos en los niveles de participación de mujeres en diferentes instancias, como en el Parlamento, aunque persistieron carencias que se evidenciaron en el bajo número de candidaturas femeninas en las elecciones de mayo. Así pues, el continente asiático siguió siendo escenario de importantes retos en lo que respecta a la implementación de la agenda género, paz y seguridad en el marco de las negociaciones de paz.

4.2 Análisis de casos

Asia Meridional

India (Assam)	
Actores negociadores	Gobierno, ULFA-PTF, ULFA-I; AANLA, AANLA (FG), BCF, BCF (BT), STF, ACMA, ACMA (FG) y APA
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	--
Síntesis:	El estado indio de Assam ha sido foco de varios conflictos y tensiones entre el Gobierno indio y diferentes grupos

armados que han reivindicado la independencia Assam o un mayor reconocimiento de los derechos políticos y culturales de diferentes minorías étnicas. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se produjeron varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasaron. En 2005 se inició un proceso de paz con el grupo armado United Liberation Front of Asom (ULFA) que se interrumpió en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Desde 2011 se produjo una reducción significativa de la violencia en el estado y numerosos grupos armados entregaron las armas o iniciaron conversaciones con el Gobierno, entre ellos la principal organización insurgente del estado, ULFA, que sufrió una escisión como consecuencia del diálogo por parte de una facción contraria a las conversaciones de paz.

El Gobierno indio firmó en septiembre un acuerdo de paz con ocho grupos armados adivasis operativos en el estado de Assam, en la región nordeste del país. Los grupos firmantes eran All Adivasi National Liberation Army (AANLA), AANLA (FG), Birsá Commando Force (BCF), BCF (BT), Santhal Tiger Force, Adivasi Cobra Militant of Assam (ACMA), ACMA (FG) y Adivasi People's Army (APA), con los que había vigente un acuerdo de alto el fuego desde 2016. Se trató de un acuerdo de paz tripartito entre el Gobierno central de la India, el Gobierno del estado de Assam y los grupos armados, y en la firma participaron el ministro de Interior Amit Shah y el ministro jefe de Assam, Himanta Biswa Sarma. Los ocho grupos armados estaban integrados por un total de 1.182 insurgentes. El acuerdo implica la desmovilización de los combatientes y la aceptación por parte de estos de la legislación vigente india. El Gobierno indio, por su parte, se comprometió a proteger y preservar la identidad social, cultural, lingüística y étnica de los grupos adivasis; a garantizar el desarrollo de plantaciones de té en las aldeas adivasis de Assam; a establecer un consejo de bienestar y desarrollo adivasi; a rehabilitar cuadros armados y garantizar el bienestar de los trabajadores de las plantaciones de té; y a proporcionar un paquete de desarrollo especial de 1.000 millones de rupias para la mejora de la infraestructura en las aldeas adivasis. El ministro de Interior enmarcó el acuerdo en un plan del Gobierno para lograr que en 2025 no quedara activo ningún grupo considerado extremista por el Ejecutivo y resolver también todas las disputas territoriales entre los diferentes estados del nordeste de India en 2024. Los insurgentes vivían en "campamentos designados" (centros de acantonamiento) desde la firma del alto el fuego. En diciembre, cerca de 1.200 integrantes de los grupos armados de la tribu Bru Bru Revolutionary Army of Union (BRAU) y United Democratic Liberation Front of Barak Valley (UDLF-BV) también hicieron entrega de sus armas. Los grupos armados bru, que habían iniciado negociaciones en 2017, presentaron sus demandas de creación de un consejo económico autónomo, la concesión del estatus pleno de Tribu (de las zonas

planas) Reconocida (*Scheduled Tribe (Plain) status*) y un acuerdo de tierras para la comunidad bru de Assam.

India (Nagalândia)	
Actores negociadores	Gobierno indio, NSCN-IM, NNPG: GPRN/ NSCN (Kitovi Zhimomi), NNC, FGN, NSCN(R), NPGN (Non-Accord), NNC/ GDRN/NA, ZUF
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Acuerdo marco (2015)

Síntesis:

El estado indio de Nagalandia ha vivido una situación de conflicto armado y crisis sociopolítica desde los años cincuenta, como consecuencia de la aspiración no satisfecha de independencia y creación de un Estado soberano de gran parte de la población naga. Desde la década de los sesenta se han producido diferentes intentos de negociación, pero no fue hasta el año 1997 que se logró un acuerdo de alto el fuego con el grupo NSCN-IM, uno de los principales actores del conflicto. A pesar de que el acuerdo se ha mantenido vigente hasta la actualidad, las negociaciones no han logrado avances significativos en los temas centrales, aunque en el año 2012 el proceso de paz experimentó un impulso gracias a un mayor involucramiento del Gobierno naga y parlamentarios del estado. En paralelo a las negociaciones con el NSCN-IM, en el año 2001, el Gobierno alcanzó otro acuerdo de alto el fuego con la organización insurgente NSCN-K, sin que tampoco estas negociaciones hayan avanzado de manera significativa. En 2015, el Gobierno y el NSCN-IM alcanzaron un preacuerdo marco de paz, considerado un preámbulo para la resolución final del conflicto. Sin embargo, ese mismo año se rompió el acuerdo de alto el fuego con el NSCN-K, reiniciándose enfrentamientos de carácter violento.

Las negociaciones de paz entre el NSCN-IM y el Gobierno indio se reanudaron en abril después de varios meses de pausa, tras el episodio de violencia que tuvo lugar en Nagalandia a finales de 2021 y que paralizó las conversaciones.¹ No obstante, al finalizar el año no se habían dado avances suficientes para lograr la firma de un acuerdo definitivo. El interlocutor del Gobierno central indio, A K Mishra, se desplazó a Nagalandia y se reunió por primera vez con representantes del grupo armado, entre ellos su secretario general, Thuingaleng Muivah, en su cuartel general, Camp Hebron. La reunión en este emplazamiento se debió al estado de salud de Muivah, octogenario, y que había sido hospitalizado en las semanas previas al encuentro. Además, Mishra también se reunió con el comité central del gobierno estatal para la cuestión política naga, encabezado por el ministro jefe de Nagalandia, Neiphiu Rio, y representantes de la sociedad civil naga. En el marco de la visita al estado, también se acordó la extensión por tres meses del acuerdo de alto el fuego con tres grupos armados, NSCN-NK, NSCN-R y NSCN-

KK. En mayo, una delegación de 10 representantes del NSCN-IM se desplazaron a Delhi para proseguir las negociaciones, y mantuvieron varias reuniones con el Gobierno central, en las que este habría reiterado la urgencia de alcanzar una solución y al mismo tiempo habría reafirmado la posición de no aceptar ni una bandera ni una Constitución naga. En este mismo mes, el Ejecutivo indio también mantuvo encuentros con otros actores nagas, como representantes de la agrupación NNPG y del Gobierno de Nagalandia. Diversas fuentes señalaron que tras las reuniones y propuestas del Gobierno, el NSCN-IM podría haber suspendido su participación de las negociaciones. En julio, el Gobierno naga –formado por todos los partidos con representación parlamentaria– pidió al Gobierno indio que volviera a invitar al NSCN-IM a Delhi para continuar las discusiones sobre la propuesta gubernamental. El ministro jefe de Nagalandia destacó el compromiso de toda la asamblea legislativa naga con el proceso de paz. En agosto, tras varios meses de incertidumbre, el NSCN-IM señaló que había decidido continuar validando el acuerdo marco alcanzado en 2015 al mismo tiempo que se mantenía firme en su demanda de una bandera y una Constitución propias para Nagalandia. En los meses siguientes se llevaron a cabo diferentes reuniones que, sin embargo, no consiguieron desbloquear la situación totalmente y las discusiones en torno a la cuestión de la bandera y la Constitución, los principales obstáculos para la firma de un acuerdo definitivo, no derivaron en ningún pacto entre las partes. No obstante, cabe destacar que el NSCN-IM y la NNPG alcanzaron un acuerdo para formar el “Consejo Naga de Relaciones y Cooperación”, superando así divisiones entre las distintas insurgencias nagas. Aunque diferentes analistas señalaron que este acercamiento aumentaba las posibilidades de un acuerdo, al finalizar el año no se habían logrado resultados significativos en este sentido.

Género, paz y seguridad

Las mujeres continuaron excluidas del proceso de paz a pesar del trabajo destacado en construcción de paz que organizaciones de la sociedad civil han efectuado en Nagalandia. La organización Naga Mother Association, que en diferentes momentos de las negociaciones ha desempeñado un papel de acercamiento entre los actores enfrentados, reiteró su llamamiento al Gobierno de la India para que se revoque la legislación antiterrorista Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), denunciando las violaciones de derechos humanos que se han cometido contra la población naga por parte de las fuerzas de seguridad amparándose en dicha legislación.

1. Véase el resumen sobre Nagalandia en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2021. Análisis de tendencias y escenarios*, Barcelona: Icaria, 2022.

Pakistán	
Actores negociadores	Gobierno, TTP
Terceras partes	Afganistán
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:

El Gobierno pakistaní y el grupo armado de oposición talibán Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) han llevado a cabo varios intentos de negociación en los últimos años para poner fin al conflicto armado que les enfrenta desde 2007, derivado del conflicto armado en Afganistán entre los talibanes y la coalición internacional liderada por EEUU. En 2013 y 2014, el entonces primer ministro Nawaz Sharif inició un proceso de acercamiento a la insurgencia talibán pakistaní, pero un atentado contra una escuela en Peshawar, que causó la muerte a 145 personas, puso fin a las negociaciones. Tras el retorno del régimen talibán a Afganistán en 2021, el régimen afgano promovió nuevos acercamientos entre el Gobierno pakistaní y el TTP, dando lugar a un alto el fuego temporal en 2021 y al inicio de negociaciones en 2022.

El Gobierno pakistaní y el grupo armado talibán TTP llevaron a cabo un proceso de diálogo durante varios meses, aunque a finales de noviembre el TTP se retiró de la negociación.

Tras el alto el fuego de un mes que los talibanes pakistaníes anunciaron en 2021 y que finalmente fracasó sin que se lograran negociaciones, en mayo el grupo armado talibán anunció otro nuevo alto el fuego. Inicialmente se trató de una tregua de 10 días con motivo de la festividad religiosa de Eid que se amplió hasta el 30 de mayo.

No obstante, el grupo armado acabó anunciado un alto el fuego de carácter indefinido. En paralelo, el Gobierno talibán de Afganistán declaró también en mayo a través de su portavoz, Zabihullah Mujahid, que estaba ejerciendo de mediador en unas conversaciones que estaban teniendo lugar en Kabul entre la insurgencia talibán pakistaní y representantes políticos y militares de Pakistán. Tras el anuncio del carácter indefinido del alto el fuego, el Gobierno pakistaní reconoció oficialmente su participación en las negociaciones con los talibanes mediante unas declaraciones de la ministra de Información, Marriyum Aurangzeb, que señaló que las negociaciones se habían iniciado en 2021. Tras el ascenso talibán en Afganistán se había producido un repunte de la violencia talibán en Pakistán, lo que había incrementado la tensión en las relaciones entre Kabul e Islamabad. El anuncio de alto el fuego habría sido el resultado de varias semanas de conversaciones secretas en Kabul entre el TTP y representantes de las Fuerzas Armadas de Pakistán, a las que posteriormente siguieron nuevas conversaciones públicas entre el TTP y líderes tribales pakistaníes. También se anunció la puesta en libertad de decenas de integrantes del TTP encarcelados en Pakistán, entre los que se encontraban los comandantes Muslim Khan y Mehmood Khan. Los negociadores militares pakistaníes estaban

El Gobierno de Pakistán y el grupo armado talibán TTP iniciaron un proceso de diálogo que se rompió en noviembre

encabezados por el teniente general Faiz Hameed, antiguo jefe de los servicios secretos (ISI). Respecto a la agenda de las negociaciones, el TTP presentó varias demandas: una reducción sustancial de la presencia militar en las antiguas áreas tribales del país y la retirada de la integración de las Áreas Tribales Federalmente Administradas en la provincia de Khyber Pakhtunkwa, que quedó aprobada con una reforma de la Constitución en 2018. Por su parte, Faiz Hameed habría ofrecido a los talibanes el retorno seguro a Pakistán a cambio de un alto el fuego a largo plazo que pudiera llevar al desmantelamiento del grupo armado y su integración política. La demanda de que las FATA recuperaran su estatus administrativo previo a la fusión de 2018 era inasumible para el Gobierno pakistaní, por lo que el 26 de julio una delegación de líderes religiosos se reunió en Kabul con el líder del TTP, Noor Wali Mehsud, sin que lograran convencerle de que abandonara esta exigencia. Finalmente, el 28 de noviembre el TTP anunció que abandonaba el alto el fuego e instó a sus integrantes a llevar a cabo ataques en Pakistán. El TTP señaló que rompía el alto el fuego debido al incremento en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas contra el grupo insurgente en las zonas tribales del noroeste y otras áreas de la provincia de Khyber Pakhtunkwa. El 30 de noviembre tuvo lugar un atentado contra la policía que protegía a un equipo sanitario de vacunación contra la polio en Baluchistán. El anuncio de ruptura del acuerdo de alto el fuego se produjo un día antes de la toma de posesión como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas por Asim Munir.

Género, paz y seguridad

Mientras las negociaciones entre el Gobierno pakistaní y el TTP se mantuvieron activas no trascendió que hubiera participación activa de mujeres en ninguna de las delegaciones negociadoras, ni que se hubieran incluido asuntos relativos a los derechos de las mujeres o de la población LGTBIQA+ en la agenda de conversaciones. No obstante, tras la ruptura del proceso facilitado por Afganistán, la ministra de Exteriores pakistaní, Hina Rabbani Khar, se desplazó a Kabul para reunirse con su homólogo afgano, en un gesto que fue considerado como un desafío por parte del Gobierno pakistaní frente a los talibanes afganos.

Asia Oriental

Corea, RPD-Corea, Rep. de	
Actores negociadores	Corea del Norte, Corea del Sur
Terceras partes	--
Acuerdos relevantes	Declaración de Panmunjom (abril de 2018)

Síntesis:

A pesar de que los momentos álgidos del diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur han sido las cumbres presidenciales que se han celebrado en el siglo XXI (2000, 2007 y 2018), desde los años setenta ha habido algunos intentos de acercar posiciones y de avanzar en la senda de la reunificación y la cooperación. Así, en 1972 ambos países firmaron la Declaración Conjunta de Corea del Norte y del Sur, en la que se esbozaban algunas medidas para la reunificación o la reducción de la carrera armamentística, entre otras cuestiones. A finales de 1991 ambos países firmaron el Acuerdo sobre Reconciliación, No-agresión, Intercambios y Cooperación y, pocas semanas más tarde, la Declaración Conjunta sobre la Desnuclearización de la Península Coreana. El primero, que se logró tras cinco rondas de negociación iniciadas en septiembre de 1990 entre los primeros ministros de ambos países, fue considerado por buena parte de la comunidad internacional como un acuerdo histórico y un punto de inflexión en la relación entre ambos países por cuanto incluía compromisos de no agresión mutua, respeto de los sistemas políticos y económicos de cada país, resolución pacífica de conflictos, cooperación económica e impulso de medidas para la reunificación de los dos países. Sin embargo, las medidas comprendidas en dicho acuerdo no se implementaron plenamente, en parte por las tensiones que generó el programa armamentístico de Corea del Norte. En 1994 el ex presidente estadounidense Jimmy Carter ejerció sus buenos oficios entre los líderes de ambos países para contener la crisis que generaron los avances en dicho programa y la decisión de Pyongyang de no permitir las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica o de abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ya en el siglo XXI, al amparo de la política de acercamiento a Corea del Norte –denominada Política del Sol– impulsada por Kim Dae-jun y continuada por su sucesor, Roh Moon-hyun, Pyongyang acogió en 2000 y 2007 las dos primeras cumbres presidenciales desde el fin de la Guerra de Corea, en las que ambos países nuevamente se comprometieron a incrementar su cooperación para avanzar hacia una mayor estabilidad y una eventual reunificación de la península coreana.

En un contexto de incremento de las tensiones militares en la península coreana, durante el 2022 no solamente no se produjeron reuniones o negociaciones entre ambos Gobiernos, sino que las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur se deterioraron notablemente tras la asunción en el cargo del nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol en el mes de mayo.

En la primera mitad del año, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, llamó en varias ocasiones a la reanudación del diálogo entre los dos países y a finales de abril, poco antes de abandonar el cargo, intercambió cartas personales con el líder Kim Jong-un en las que le instaba a establecer relaciones pacíficas y cooperativas con la siguiente administración surcoreana. En el mes de agosto, Yoon Suk-yeol hizo pública su política respecto a Corea del Norte, señalando que la desnuclearización de Corea del Norte es un requisito para el avance de la paz y la prosperidad en la región y proponiendo un plan de ayudas económicas a gran escala a cambio de que Pyongyang iniciara pasos decididos y verificables hacia su desnuclearización. A la vez, Yoon Suk-yeol también anunció su intención de

reforzar las capacidades militares del país, reservándose la posibilidad de incluso llevar a cabo ataques preventivos ante las amenazas y riesgos que entraña el programa nuclear y balístico de Corea del Norte. Poco después de tales declaraciones, Kim Yo-jong, alto cargo del Gobierno y hermana de Kim Jong-un, rechazó categóricamente los planes de cooperación intercoreana de Yoon Suk-yeol por considerar que son una copia de las que ya habían realizado las administraciones de Lee Myung-bak y Park Geun-hye entre 2008 y 2013 y por considerar que los paquetes de ayuda económica no pueden ser utilizados como trueque del programa armamentístico de su país. Además, Kim Yo-jong declaró que su Gobierno no pensaba reunirse presencialmente con el nuevo presidente surcoreano durante su mandato. Previamente, en el mes de julio, el ministro para la Unificación de Corea del Sur, Kwon Young-se, había anunciado su intención de impulsar unas relaciones intercoreanas basadas en el respeto a todos los acuerdos que ambos países han firmado en las últimas décadas y declaró que cualquier eventual diálogo o cumbre entre ambos países debería incluir la desnuclearización de la península coreana, pues consideraba que este era un asunto suficientemente importante en la construcción de confianza entre ambos países como para incluirlo en el diálogo bilateral y no dejarlo solamente en manos de la comunidad internacional. Poco después de dichas declaraciones, que se realizaron precisamente en el día en el que se conmemoraba el 50º aniversario del primer acuerdo oficial firmado entre ambos países –Comunicado Conjunto Sur-Norte, de 1972–, medios de comunicación propiedad del Gobierno norcoreano señalaron que una de las razones que explican la tensión política y militar entre ambos países es precisamente la falta de cumplimiento e implementación del mencionado acuerdo de 1972 por parte de Corea del Sur. En el Comunicado Conjunto Sur-Norte, que establece los principios rectores del proceso de reunificación coreana, ambas partes se comprometen a impulsar una reunificación sin injerencia de potencias extranjeras, sin recurrir al uso de la fuerza y construyendo una unidad nacional como un solo pueblo que trascienda ideologías y sistemas.

A pesar del bloqueo en el diálogo, a principios de septiembre el Gobierno surcoreano propuso oficialmente el inicio de conversaciones para llevar a cabo un nuevo encuentro de familias separadas por la Guerra de Corea (1950-53). Desde el año 1988, más de 133.000 personas se han registrado para participar en dichos encuentros, pero actualmente solamente unas 44.000 de ellas están vivas, y de estas un 67% tiene más de 80 años. Desde

el fin de la guerra se han llevado a cabo 21 reuniones, la última de las cuales en 2018, en un contexto de acercamiento de posturas entre ambos países y también de un diálogo sostenido entre los Gobiernos de Corea del Norte y EEUU. Si bien normalmente dichos encuentros familiares habían sido facilitados por la Cruz Roja, en

esta última ocasión el Ministerio para la Unificación surcoreano dirigió su propuesta directamente al Gobierno norcoreano y la vehiculó a través de la oficina conjunta de enlace, una medida que algunos medios de comunicación interpretaron como un gesto político de Seúl destinado a iniciar conversaciones bilaterales directas entre ambos países. El Gobierno de Corea del Norte no respondió a tal propuesta de Seúl. Durante la intervención de Yoon Suk-yeol en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre, fue la primera vez en la que el discurso de un presidente surcoreano no hizo mención alguna a Corea del Norte.

Sudeste asiático y Oceanía

Filipinas (MILF)	
Actores negociadores	Gobierno, MILF, Gobierno interino de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán
Terceras partes	Malasia, Third Party Monitoring Team, International Monitoring Team, Independent Decommissioning Body
Acuerdos relevantes	Acuerdo para el cese general de hostilidades (1997), Acuerdo sobre paz entre el Gobierno y el MILF (2001), Cese mutuo de hostilidades (2003), Acuerdo Marco sobre Bangsamoro (2012), Acuerdo Global sobre Bangsamoro (2014), Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (2018)

Síntesis:

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF, grupo escindido del MNLF, se iniciaron en 1997, pocos meses después de que el Ejecutivo de Fidel Ramos hubiera firmado un acuerdo de paz con el MNLF. Desde entonces, el proceso negociador se ha visto interrumpido en tres ocasiones (en los años 2000, 2003 y 2008) por el estallido de violencia de alta intensidad. A pesar de ello, durante las más de 30 rondas de negociación que se han producido desde finales de los años noventa se han alcanzado algunos acuerdos en materia de seguridad y desarrollo, así como un acuerdo de cese de hostilidades que en términos generales ha sido respetado. En octubre de 2012 ambas partes firmaron el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro y en marzo de 2014 el Acuerdo Global sobre Bangsamoro, que prevé la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán por una nueva entidad política con mayor cobertura territorial y competencias de autogobierno más amplias. Desde el año 2014, el proceso de paz estuvo centrado en la redacción y aprobación por parte del Congreso de la Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán, que incorpora los principales contenidos de los dos mencionados acuerdos de paz y que fue aprobada por el Congreso en 2018. Tras su ratificación en plebiscito a principios de 2019, el proceso de paz ha pivotado sobre la implementación de los acuerdos de paz, el desarrollo institucional de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (gobernada de manera interina por el líder del MILF) y el desarme del MILF.

A pesar de que a finales de 2022 se registró un importante enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y un batallón del MILF, durante todo el

año ambas partes mantuvieron reuniones regulares y periódicas y se lograron avances importantes en la implementación del acuerdo de paz de 2014.

De hecho, en diciembre el Gobierno declaró que la evolución exitosa del proceso de paz en Mindanao es la principal baza que Manila pretende mostrar a la comunidad internacional para conseguir una plaza en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2027. Estas afirmaciones sobre la implementación del Acuerdo de paz del 2014 y de la posterior Ley Orgánica de Bangsamoro que institucionalizó los principales compromisos del acuerdo, están en sintonía con el último informe del Third Party Monitoring Team (TPMT) —el organismo encargado de evaluar y asesorar la marcha del proceso de paz entre el Ejecutivo y el MILF—, que fue presentado en el mes de marzo y que cubre el período entre noviembre de 2020 y enero de 2022. Dicho informe constató un progreso constante y positivo en el proceso de paz en la región en el periodo mencionado, destacando especialmente la vigencia del alto el fuego y el funcionamiento de los mecanismos que lo supervisan, el desarrollo institucional de la Región Autónoma de Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM) a través de la actividad de la Autoridad de Transición de Bangsamoro (ATB), la aprobación de legislación fundamental para el funcionamiento de la misma, la interacción regular y efectiva entre el Gobierno de Filipinas y el Gobierno de Bangsamoro a través del Organismo de Relaciones Intergubernamentales (IGRB, por sus siglas en inglés), el inicio de la tercera fase de desmovilización de combatientes del MILF en noviembre de 2021, los avances en la concesión de amnistía a los miembros del MILF o la puesta en funcionamiento del Fondo Fiduciario de Normalización de Bangsamoro. El TPMT, sin embargo, señaló que la implementación del proceso de paz se vio ralentizada por la pandemia de la COVID-19 y el debate sobre la extensión del período de transición más allá de la fecha originalmente prevista de junio de 2022. Las reflexiones del TPMT coinciden en gran medida con las de los Paneles de Implementación de la Paz del Gobierno y el MILF —que a mediados de año emitieron un comunicado conjunto valorando muy positivamente la evolución de proceso de paz, y anunciando varios acuerdos— y también con las del Organismo de Relaciones Intergubernamentales, principal mecanismo de negociación bilateral entre el Gobierno de Filipinas y el Gobierno de la RABMM, y que se reúne de manera regular tras su establecimiento en 2019. En junio, dicho organismo presentó su segundo informe de seguimiento sobre el diálogo entre ambas administraciones (cubriendo el período entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021), señalando que la cooperación entre ambos gobiernos está siendo muy beneficiosa para la consolidación de la paz en Mindanao.

Durante el 2022, el proceso de implementación del acuerdo de paz avanzó sustancialmente tanto en su dimensión política e institucional como en la llamada normalización, que incluye el desarme,

desmovilización y reinserción de los ex combatientes del MILF, la transformación de los seis campamentos del MILF en áreas pacíficas y productivas, la amnistía para los combatientes del MILF, el repliegue y la redistribución de las Fuerzas Armadas en la región o el desmantelamiento de grupos armados y milicias privadas, entre otras cuestiones. Respecto del anexo de Normalización del Acuerdo de Paz de 2014, cabe destacar que en el mes de enero el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron tres resoluciones concurrentes que regulan la concesión de amnistía a ex combatientes del MILF y del MNLF, por las que pueden amnistiarse solamente aquellos delitos punibles cometidos por razones y creencias políticas. Sin embargo, a finales de año, tanto el MILF como el TPMT lamentaron que todavía no se hubiera constituido la Comisión Nacional de Amnistía, que tiene la tarea de procesar las solicitudes de amnistía de los ex rebeldes moros y comunistas y de determinar si los solicitantes tienen derecho a amnistía en virtud de las Proclamaciones números 1090, 1091, 1092 y 1093 por parte del presidente Duterte en febrero de 2021. En este sentido, cabe señalar que en octubre el Panel de Implementación de la Paz del MILF presentó 524 solicitudes de amnistía de excombatientes del MILF y que el jefe del mismo, Mohagher Iqbal, instó al Gobierno a acelerar su tramitación por considerar que es un aspecto clave del proceso de reconciliación en las áreas afectadas por el conflicto armado. El segundo aspecto clave de la llamada normalización fue la reanudación de la tercera fase del proceso de desmovilización de 40.000 ex combatientes del MILF. Desde el inicio de dicho proceso en 2015 hasta la reanudación de la tercera fase del mismo en octubre de 2022 se habían desmovilizado 19.345 combatientes del MILF. La tercera fase del proceso se inició en noviembre de 2021, pero su continuación se vio obstaculizada por la expansión de la COVID-19. Según el acuerdo de paz, durante la tercera fase se deberían desmovilizar 14.000 combatientes, de los que en octubre de 2022 lo habían hecho 7.200, con otros 5.500 combatientes pendientes de desmovilización antes de finalizar el año. Este proceso está supervisado por el International Decommissioning Body, compuesto por los Gobiernos de Turquía, Noruega y Brunei Darussalam y por personal local designado por Manila y por el MILF. Aunque el Gobierno señala que el calendario de implementación del acuerdo sigue el ritmo previsto, a lo largo del 2022 el MILF había criticado de manera reiterada la lentitud y parálisis en dicho proceso. Finalmente, cabe destacar que en junio la UE, el PNUD y la Oficina del Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad (OPAPRU) lanzaron un proyecto de dos años de transformación de los seis campamentos del MILF en comunidades pacíficas y productivas mediante la mejora de las capacidades locales y el desarrollo de medios de vida sostenibles a través del

Tuvo una alta significación histórica el encuentro que a principios de septiembre mantuvieron Nur Misuari y Ebrahim Murad, siendo la primera reunión en más de dos décadas entre los líderes del MNLF y el MILF

apoyo a empresas agrícolas, programas de formación profesional alternativos o microcréditos para la diversificación de la actividad productiva.

En cuanto a la dimensión política del acuerdo de paz, sin duda el hecho más relevante del año fue la toma de posesión del cargo en agosto de las 80 personas que componen la Autoridad de Transición de Bangsamoro, cuyo mandato original (2019-2022) fue prolongado durante otros tres años (hasta 2025) a finales de 2021 por parte del presidente Duterte por considerar que la expansión de la COVID-19 había ralentizado el desarrollo institucional, actividad legislativa y acción gubernamental de la ATB. Desde su establecimiento, la ATB ha estado encabezada por el líder del MILF, Ebrahim Mura. Según el acuerdo de paz, el MILF tenía la potestad de designar a 41 de los 80 miembros de la ATB, mientras que el Gobierno central tenía la responsabilidad de designar a las 39 personas restantes. Después de la nominación de cargos por parte de Manila, el Parlamento de la RABMM tendrá a 55 de sus 80 representantes designados por los grupos insurgentes históricos en Mindanao: 41 por parte del MILF (41) y 14 por parte por las dos principales facciones del MNLF, la liderada por el fundador del grupo, Nur Misuari (7) y la liderada por Muslimin Sema y Yusoph Jikiri. Si bien las facciones de Sema y Jikiri previamente ya habían participado directamente en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF (integrándose, por ejemplo, en la Comisión de Transición de Bangsamoro), la participación del MNLF de Misuari en la Asamblea Parlamentaria de la RABMM (donde dos sus hijos tendrán un escaño) supone de facto la armonización o convergencia de los dos procesos de negociación que el Gobierno mantenía con el MILF y el MNLF. Hasta el momento, Nur Misuari había decidido establecer una negociación directa y paralela con el Ejecutivo sobre la plena implementación del acuerdo de paz que Manila y el MNLF firmaron en 1996, rechazando participar en ningún espacio ni mecanismo de decisión derivado del acuerdo de paz de 2014 entre Manila y el MILF e incluso negando la legitimidad del mismo. En este sentido, tiene una alta significación histórica el encuentro que a principios de septiembre mantuvieron Nur Misuari y Ebrahim Murad, siendo la primera reunión en más de dos décadas entre los líderes del MNLF y el MILF. La unidad entre el MILF y el MNLF también se oficializó en la conformación del nuevo Gobierno de la RABMM, que está liderado por Ebrahim Murad e integrado por figuras históricas destacadas del MNLF, como el propio Sema o el hijo de Yusoph Jikiri. Durante la sesión inaugural de la legislatura de la ATB, el nuevo presidente filipino, Ferdinand Marcos, se comprometió a seguir apoyando el proceso de paz, instó al Parlamento de Bangsamoro a aprobar la legislación necesaria para el buen funcionamiento de la RABMM y señaló que no habrá nuevas extensiones

del período transicional de la ATB más allá de mayo del 2025, fecha en la que deberían llevarse a cabo las primeras elecciones regionales en la RABMM.

Género, paz y seguridad

En septiembre se inauguró la legislatura del nuevo Parlamento de la ATB, compuesto por 80 miembros, 41 designados por el MILF y 39 por el Gobierno central. En el mandato entre 2022 y 2025, 16 de las mencionadas 80 personas son mujeres, un número superior al del Parlamento anterior (2019-22). Sin embargo, en las elecciones que se celebraron el mes de mayo, las mujeres solamente representaban el 20% de las personas candidatas a los cargos ejecutivos o legislativos en liza en los comicios en las 27 provincias y 33 ciudades de Mindanao. Además, la mayoría de estas mujeres son esposas, hijas o hermanas de los titulares de cargos públicos, o bien de los que terminen su tercer y último mandato. En el mandato anterior (2019 a 2022) las mujeres suponían en 15% de las 27 gobernaciones de Mindanao, el 15% de los escaños distritales y el 33% de las alcaldías de las ciudades. Según el Informe Global de Brecha de Género 2021 del Foro Económico Mundial, Filipinas sigue siendo el país con mejor desempeño en Asia en términos de igualdad de género, ocupando el puesto 17 entre 156 países. Por otra parte, en diciembre, Naciones Unidas anunció la finalización de un programa de formación y empoderamiento para la reinserción civil para 2.000 excombatientes de la Brigada Auxiliar de Mujeres Islámicas de Bangsamoro del MILF. El programa, que fue implementado durante dos años por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz del secretario general de la ONU, también impulsó el establecimiento de la Oficina de Paz, Seguridad y Reconciliación bajo la Oficina del Ministro Principal de la RABMM para reforzar la seguridad y la mediación de conflictos durante la transición, fortaleció las capacidades de las instituciones regionales y locales para hacer frente a eventuales conflictos durante el período de transición de la RABMM y colaboró con la Comisión de Mujeres de Bangsamoro para implementar el Plan de Acción Regional sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

Filipinas (NDF)	
Actores negociadores	Gobierno, NDF (organización paraguas de distintas organizaciones comunistas, entre ellas el Partido Comunista de Filipinas, que es el brazo político del NPA)
Terceras partes	Noruega
Acuerdos relevantes	Declaración conjunta de La Haya (1992), Acuerdo conjunto sobre seguridad y garantías de inmunidad (1995), Acuerdo sobre el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (1998)

Síntesis:

Las negociaciones entre el Gobierno y el NDF se iniciaron en 1986, tras la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos. Desde entonces se han producido numerosas rondas de negociaciones, pero solamente se ha llegado a un acuerdo en uno de los cuatro aspectos sustantivos de la agenda negociadora identificados en la Declaración de La Haya de 1992: derechos humanos y derecho internacional humanitario (se firmó un acuerdo en 1998); reformas socioeconómicas; reformas políticas y constitucionales; y fin de las hostilidades y disposición de fuerzas. Desde el año 2004, el Gobierno de Noruega ejerce tareas de facilitador entre el Gobierno y el NDF, organización política que representa al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado (el NPA) en las negociaciones de paz. Además de las diferencias sustantivas entre el Gobierno y el NDF acerca del modelo socioeconómico y político que más conviene a Filipinas, uno de los aspectos que en los últimos años ha generado mayor controversia entre las partes es el de las garantías de seguridad e inmunidad para los miembros del NDF que participan en las negociaciones de paz.

Al igual que en los años precedentes, en 2022 no se produjeron conversaciones formales entre el Gobierno y el National Democratic Front (NDF), aunque tanto el Ejecutivo saliente de Rodrigo Duterte como la nueva Administración de Ferdinand Marcos siguieron llevando a cabo negociaciones directas a escala local con unidades del grupo armado New People's Army (NPA). La primera mitad del año estuvo marcada por la negativa tajante del Gobierno de Duterte a entablar cualquier tipo de contacto con el NDF y por las elecciones presidenciales del mes de mayo, en las que ninguna de las candidaturas abogó abiertamente por la reanudación del proceso de negociación con el NDF, que en las últimas décadas ha negociado en nombre del Partido Comunista de Filipinas (PCF) y de su brazo armado, el NPA. En este sentido, en el mes de febrero, el fundador del PCF y del NPA, Jose Maria Sison, señaló que la negociación podría reanudarse después de las elecciones si se cumplían algunas condiciones, como la anulación de la Ley Antiterrorista (aprobada en 2020), la disolución del Grupo de Trabajo Nacional para Terminar con el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC, por sus siglas en inglés) o la eliminación del NPA, el PCF y el NDF del listado de organizaciones terroristas de Filipinas. En este sentido, a finales de febrero el Consejo Antiterrorista designó como terroristas a 16 organizaciones que supuestamente forman parte del PCF y del NDF. Tras la victoria de Ferdinand Marcos en los comicios presidenciales, este no mencionó la reanudación del diálogo con el NDF en su discurso de investidura. En la misma línea, en el mes de julio, tras la primera reunión del NTF-ELCAC bajo el nuevo Gobierno, tanto la Asesora del Consejo de Seguridad Nacional, Clarita Carlos, como Asesor Presidencial para la Paz, la Reconciliación y la Unidad, Carlito G. Gálvez, declararon que dicho organismo había aconsejado a Ferdinand Marcos la no reanudación de las negociaciones con el NDF, aunque dejaron claro que la decisión final sobre esta cuestión depende del nuevo presidente. También señalaron que la intención del Gobierno es continuar con el enfoque de las llamadas

negociaciones de paz locales o localizadas, puesto que está funcionando y permitiendo la pacificación del país. Para corroborar tal afirmación, el NTF-ECLAC mencionó datos del Departamento de Defensa Nacional según los que hasta el mes de mayo se habían rendido o entregado como mínimo 26.414 combatientes del NPA (que el Gobierno denomina oficialmente Grupo Terrorista Comunista). Según datos oficiales, actualmente el número de combatientes del NPA es algo superior a los 2.000 y el 75% de los 89 frentes del grupo han sido neutralizados. Por otra parte, el NTF-ECLAC también recomendó al Gobierno la concesión de una amnistía a combatientes del NPA (no de otros grupos armados comunistas). Según Gálvez, esta medida podría beneficiar a entre 8.000 y 10.000 combatientes del NPA, aunque su concreción y materialización dependen de las directrices del Senado. Cabe señalar que Karapatan, una de las redes de derechos humanos más importantes del país, declaró a principios de 2022 que desde la creación del NTF-ECLAC, 3.908 civiles han sido obligados a rendirse, mientras que casi otras 4.000 personas han sido detenidas por cargos motivados políticamente, muchas de ellas etiquetadas públicamente como simpatizantes comunistas, miembros del NPA o terroristas o todo lo anterior.

Por su parte, tanto el NDF como el PCF se opusieron tajantemente a las negociaciones de paz localizadas por considerarlas una estrategia de contrainsurgencia destinada a dividir al movimiento revolucionario, a promover la guerra psicológica, a obtener información de inteligencia y a tener un mayor control sobre personas, familiares o comunidades con vínculos con el grupo insurgente. Además, el PCF señaló que dicho enfoque es una cortina de humo para desviar la atención de las operaciones de combate a gran escala y promueve la corrupción entre los estamentos militares, administraciones públicas y municipios que participan en dichos programas. Del mismo modo, el NDF y el PCF criticaron el ofrecimiento de una amnistía y los programas de desarme, desmovilización y reinserción como una manera de desmovilizar y cooptar a combatientes del NPA. A pesar de estas críticas, a finales de junio Jose Maria Sison declaró nuevamente estar abierto a la reanudación de las negociaciones si el Gobierno simplemente ratificaba los acuerdos firmados por ambas partes desde 1992, año en el que se adoptó la Declaración de La Haya como marco negociador. Durante todo el año se registraron movilizaciones y acciones de sensibilización social e incidencia política por parte de organizaciones de la sociedad civil en favor de la reanudación de las negociaciones formales entre el Gobierno y el NDF, por considerar que es el único formato que permite abordar políticamente las causas de índole social y política que provocaron en su día el surgimiento del NPA. Cabe destacar especialmente el rol

A mediados de diciembre murió a los 83 años el fundador del PCF y del NPA, Jose Maria Sison, exiliado en Europa después de haber sido excarcelado tras la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos a mediados de los años ochenta

en dichas movilizaciones de la Plataforma EcuMénica de Paz de Filipinas (PEPP), una red de cinco federaciones religiosas —la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP), el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas (NCCP), el Consejo Filipino de Iglesias Evangélicas (PCEC), la Conferencia de Superiores Mayores de Filipinas y el Foro EcuMénico de Obispos (EBF). Cabe señalar que a mediados de diciembre murió Jose Maria Sison a los 83 años, en Utrecht. Sison vivía exiliado en Europa después de haber sido excarcelado tras la caída de la dictadura de Ferdinand Marcos a mediados de los años ochenta, y en los últimos años había ejercido como consultor del NDF, aunque tanto medios de comunicación como el propio Gobierno consideraban que seguía teniendo una importancia decisiva en la formulación de la estrategia política, militar y negociadora del movimiento comunista.

Myanmar	
Actores negociadores	Gobierno; grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego (NCA): DKBA, RCSS/SSA-South, CNF, KNU,KNLAPC, ALP, PNLO, ABSDF, NMSP y LDU; grupos armados no adheridos al NCA: UWSP, NDAA, SSPP/SSA-N, KNPP, NSCN-K, KIA, AA, TNLA, MNDA
Terceras partes	China, ASEAN
Acuerdos relevantes	Acuerdo de alto el fuego nacional (octubre de 2015)

Síntesis:
 Desde que en 1948 se iniciara el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Myanmar y los grupos insurgentes de adscripción étnica se han producido varios procesos de negociación que han perseguido el fin de la violencia armada. Desde finales de la década de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, numerosos grupos armados alcanzaron acuerdos de alto el fuego con el Gobierno birmano. Si bien nunca se alcanzaron acuerdos de paz definitivos, la violencia se redujo notablemente como consecuencia de estos pactos. En el año 2011, después del cambio de Ejecutivo como consecuencia de las elecciones de 2010, el nuevo Gobierno inició una serie de acercamientos a la insurgencia armada que desembocaron en el inicio de negociaciones de paz y la firma de acuerdos con la mayoría de los grupos armados que operan en diferentes zonas del país. A mediados de 2012 el Gobierno había firmado acuerdos de alto el fuego bilaterales con 12 organizaciones insurgentes. En 2013 se inició un proceso de diálogo con diferentes grupos armados con el objetivo de lograr un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y de impulsar conversaciones de carácter político. En 2015 el Gobierno y ocho grupos armados de oposición firmaron un acuerdo de alto el fuego (NCA, por sus siglas en inglés) y se iniciaron los primeros pasos para el diálogo político. En 2016, la consejera de Estado del Gobierno, Aung San Suu Kyi, convocó la Conferencia Panglong 21 que reunió al Gobierno con los grupos armados de oposición, dando inicio a una nueva fase del proceso de paz. La Conferencia fue convocada en varias ocasiones en los años posteriores.

En lo que respecta a las negociaciones con los grupos armados activos en el país, el régimen militar convocó a las organizaciones insurgentes a conversaciones que se iniciaron en el mes de mayo y en las que participaron siete de los grupos adheridos al acuerdo de alto el fuego firmado en 2015 (Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA), Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), the KNU/KNLA Peace Council, New Mon State Party (NMSP), Arakan Liberation Party (ALP), Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO) y Lahu Democratic Union (LDU). Además, también participaron en las conversaciones tres grupos armados no adheridos al alto el fuego, United Wa State Army (UWSA), National Democratic Alliance Army (NDAA-Mongla) y Shan State Progressive Party (SSPP). Las conversaciones tuvieron el formato de reuniones bilaterales entre el máximo dirigente de la Junta Militar, Min Aung Hlaing y representantes de los grupos armados. Estas conversaciones recibieron críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y de otros grupos armados, que señalaron que únicamente servían para legitimar al régimen militar, pero no para solucionar el conflicto armado que atraviesa el país. Los grupos armados insistieron en sus demandas de autogobierno y el Gobierno les ofreció integrarse en las fuerzas de seguridad oficiales. En diciembre, siete grupos armados firmantes del acuerdo de alto el fuego demandaron llevar a cabo una nueva reunión con el presidente del Comité de Solidaridad Nacional y Negociaciones de Paz del Gobierno, el teniente general Yar Pyae, pero el Gobierno rechazó la posibilidad de esta reunión, señalando que las crisis en el país impedían que pudiera celebrarse. Los grupos armados pretendían celebrar un encuentro de bajo perfil en Chiang Mai (Tailandia), en la que participaran representantes de ambas partes, seguida de una ronda de reuniones en los estados Shan o Mon. Los grupos que habían solicitado la reunión eran Restoration Council of Shan State (RCSS), New Mon State Party, Karen National Union/Karen National Liberation Army Peace Council (KPC), Arakan Liberation Party, Democratic Karen Benevolent Army, Pa-O National Liberation Organization (PNLO) y Lahu Democratic Union. Algunos analistas habrían apuntado a la situación de irrelevancia de la mayoría de grupos (con la excepción del RCSS) y como este llamamiento a una reunión sería un intento de supervivencia para las organizaciones armadas. Otros grupos firmantes del acuerdo como el KNU señalaron que no tenían intención de reunirse con el régimen y que seguirán enfrentándose por la vía armada.

Por otra parte, prosiguieron los esfuerzos diplomáticos de la organización regional ASEAN para buscar una solución política a la crisis del país, pero no se lograron avances en la implementación del consenso de cinco puntos acordado en 2021 para solventar la crisis: el cese inmediato de la violencia en el país; diálogo entre todas las partes; el nombramiento de un enviado especial; asistencia humanitaria de la ASEAN; y la visita del enviado especial a Myanmar para reunirse con todas las partes. En noviembre ASEAN se reafirmó en el

consenso de cinco puntos y encargó a los ministros de Exteriores que desarrollaran un plan de implementación concreto, al tiempo que se mantenía la prohibición de que miembros del gobierno militar de Myanmar participen en las cumbres de la organización asiática. En diciembre Tailandia celebró una reunión en la que reunió a varios ministros de exteriores de países de ASEAN –Laos, Camboya y Vietnam–, incluyendo también a representantes gubernamentales de Myanmar. Sin embargo, no asistieron los representantes de los países más críticos con el gobierno militar birmano, Malasia, Filipinas, Indonesia y Singapur. En la reunión, que abordó la implementación del consenso de cinco puntos y la situación humanitaria del país, no se lograron avances concretos.

Papúa Nueva Guinea (Bougainville)	
Actores negociadores	Gobierno de Papúa Nueva Guinea, Gobierno de la Región Autónoma de Bougainville
Terceras partes	Bertie Ahern
Acuerdos relevantes	Acuerdo de Paz de Bougainville (2001)
Síntesis:	El conflicto armado entre el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y el Ejército Revolucionario de Bougainville (1988-1998), que algunas fuentes consideran ha sido el más mortífero en Oceanía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, finalizó con un cese de hostilidades en 1998 y con la firma de un acuerdo de paz en 2001 en Arawa (mayor ciudad de Bougainville). Dicho acuerdo, entre otras cuestiones, preveía el establecimiento de la Región Autónoma de Bougainville (RAB), el desarme y la desmovilización de combatientes, y la celebración de un referéndum de independencia no vinculante en un período máximo de 15 años posteriormente a la elección del primer Gobierno de la RAB, que finalmente tuvo lugar en 2005. Tras varios años de negociaciones entre los Gobiernos nacional y autonómico, en 2018 el Organismo Conjunto de Supervisión del Acuerdo creó el Grupo de Trabajo de Planificación del Post-referéndum y el ex presidente irlandés Bertie Ahern fue elegido presidente de Comisión sobre el Referéndum de Bougainville, encargada de elaborar el censo y demás preparativos logísticos de la consulta. Tras haberse retrasado en varias ocasiones, finalmente el referéndum se celebró entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, con una pregunta binaria en la que se podía elegir entre mayor autonomía o independencia para la región.

En el mes de abril los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y de la Región Autónoma de Bougainville alcanzaron un importante acuerdo en las negociaciones sobre el futuro estatus político de Bougainville, pero durante la segunda mitad del año las relaciones entre ambas partes se deterioraron e incluso se postergaron las conversaciones. A principios de abril, el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y el presidente del Gobierno Autónomo de Bougainville, Ishmael Toroama, firmaron el Pacto de Era Kone sobre la Finalización del Referéndum de Bougainville, que estipula que los resultados del referéndum del 2019 y las conclusiones y acuerdos de las consultas y

negociaciones que han mantenido desde entonces las dos partes deberán ser presentados ante el Parlamento de Papúa Nueva Guinea antes de finales de 2023. Además, una vez que el Parlamento haya votado sobre la propuesta de acuerdo político para Bougainville que hagan los dos gobiernos, esta debería implementarse no antes del 2025 y no más tarde del 2027. El acuerdo también preveía que, tras la ratificación del mismo por ambos Gobiernos, los equipos técnicos de ambos Ejecutivos redactarían los borradores de las regulaciones constitucionales necesarias para avanzar en la hoja de ruta descrita en el acuerdo. Durante la firma del acuerdo, Toroama agradeció a James Marape y al Gobierno en su conjunto su compromiso hacia el proceso de negociación, mientras que Marape, ante la inminencia de las elecciones generales que se celebraron en el mes de julio, garantizó que ganara quien ganara los comicios, el Acuerdo de Era Kone y, por tanto, la continuación del proceso de negociación, sería vinculante tanto para el Parlamento como para el Gobierno de Papúa Nueva Guinea. Por otra parte, en el mes de febrero el Gobierno de Bougainville anunció la creación de la Comisión de Planificación de la Constitución de Bougainville, conformada por 40 personas procedentes de varias partes de la región y representativas de distintos sectores de la sociedad, como mujeres, jóvenes, veteranos y confesiones religiosas. Dicha Comisión tiene el mandato de redactar un borrador de constitución de un eventual Bougainville independiente, que previsiblemente debería estar lista para el primer trimestre de 2025. En el mes de abril, el Gobierno trasladó a dicha comisión tanto su hoja de ruta política como los principios rectores y los estándares internacionales en materia de diseño constitucional, e hizo un llamamiento a que iniciara procesos consultivos y participativos en toda la región de Bougainville para garantizar que la nueva Constitución fuera realmente inclusiva y democrática.

A pesar de la firma del Acuerdo de Era Kone, en la segunda mitad del año las relaciones entre los dos Gobiernos se deterioraron hasta el punto de que el Gobierno de Bougainville solicitó el aplazamiento de la reunión del Organismo de Supervisión Conjunto, el principal mecanismo y foro de negociación entre ambas partes. En el mes de agosto, una vez reelecto en el cargo tras unas elecciones marcadas por la violencia y las acusaciones de fraude, James Marape declaró que la determinación del estatus político de Bougainville afectaba a cuestiones de mucho calado político como la soberanía nacional o las fronteras internacionales del país, de modo que la ciudadanía de todo el país debería ser consultado al respecto. Después de señalar que la unidad nacional del país fue definida en la Constitución de 1975 y que solamente una reforma constitucional podría modificar tal unidad, Marape señaló que hasta la mitad de 2023 el Gobierno llevaría a cabo un proceso

de consultas en todo el país sobre las implicaciones constitucionales del acuerdo político sobre Bougainville que deberá ratificar el Parlamento nacional de Papúa Nueva Guinea. Unos meses más tarde, un representante del Gobierno declaró que ningún acuerdo político podía usurpar el poder y la autoridad de la Constitución, y que la obligación del Gobierno era proteger la Constitución y a la vez someterse a ella. También añadió que una decisión tan importante como la secesión de una parte del territorio debía ser votada y sancionada por toda la ciudadanía. Poco después de tales declaraciones, el ministro de Defensa de Australia se reunió con James Marape y a continuación declaró que su Gobierno defendería y apoyaría cualquier decisión que tomara el Gobierno respecto de Bougainville. Además, también anunció su intención de firmar un ambicioso tratado de seguridad con Papúa Nueva Guinea. Por su parte, tanto el Gobierno Autónomo de Bougainville como su presidente, Ishmael Toroama, señalaron que tanto la celebración del referéndum en 2019 como la implementación de una de sus opciones (la independencia de Bougainville) estaban garantizadas constitucionalmente y que no existe base legal alguna para que la ciudadanía de todo el país sea consultada, pues el Acuerdo de paz del año 2001 deja claro que son los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y de Bougainville las dos únicas partes que deberán discutir y acordar una propuesta sobre el estatus político de Bougainville sobre los resultados del referéndum, y que dicha propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento de Papúa Nueva Guinea. Toroama también criticó el posicionamiento de Australia en favor del Gobierno nacional y lamentó que en los últimos tiempos el Gobierno australiano hubiera ignorado todas las demandas de cooperación y asistencia en todas las actividades impulsadas por el Gobierno de Bougainville para preparar la posible independencia del país. Toroama también declaró que Australia utiliza su poder e influencia en la región y el anuncio de un tratado de seguridad con Papúa Nueva Guinea para intimidar a la población de Bougainville y condicionar las decisiones de su Gobierno. Ante tales circunstancias, a finales de octubre el Gobierno de Bougainville solicitó al aplazamiento de la reunión del Organismo Conjunto de Supervisión por considerar que el ejecutivo de Papúa Nueva Guinea no estaba mostrando voluntad política para implementar el acuerdo de paz de 2001 y se estaba apartando del espíritu y la letra del Acuerdo de Era Kone firmado en abril.

Género, paz y seguridad

En el mes de abril la Australian National University publicó un artículo² sobre la participación de las mujeres en el proceso de negociación entre los Gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Bougainville tras la celebración del referéndum del 2019 en el que se constata que

2. Kabuni, Michael y Hansen, Ancuta, *Women's Inclusion in the Post-Referendum Consultation Process between Papua New Guinea and Bougainville*, 2022, Canberra, ACT: Dept. of Pacific Affairs, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, The Australian National University.

las delegaciones de ambas partes en las conversaciones intergubernamentales y en el seno del Organismo de Supervisión Conjunta están conformadas íntegramente por hombres. El artículo señala que las cuatro mujeres diputadas que hay en el Parlamento de Bougainville participan como “observadoras” en las reuniones del OSC –juntamente con otras personas diplomáticas y funcionarias de ambos Gobierno– y destaca que no haya ninguna diputada en el Parlamento de Papúa Nueva Guinea. La Australian National University destaca la importancia de que las mujeres tengan una mayor participación en las mencionadas negociaciones entre Gobiernos y señala, sin embargo, que el Gobierno de Bougainville sí ha previsto e incentivado la participación de mujeres en varios foros, como el Foro de Consulta de Líderes de Bougainville –creado para propiciar que determinados sectores de la sociedad civil presenten sus demandas y propuestas al Gobierno sobre las negociaciones post-referéndum–, la Misión de Preparación para la Independencia –organismo para impulsar los preparativos para la independencia a nivel interno, nacional e internacional– o la Comisión de Planificación de la Constitución de Bougainville, creada para elaborar la Constitución de un eventual Bougainville independiente.

Tailandia (sur)	
Actores negociadores	Gobierno, BRN
Terceras partes	Malasia
Acuerdos relevantes	--

Síntesis:

Desde el año 2004, fecha en la que se reinicia el conflicto armado en el sur de Tailandia, se han producido varias conversaciones informales, exploratorias y discretas entre el Gobierno tailandés y el movimiento insurgente. Algunas de estas iniciativas de diálogo han sido lideradas por organizaciones no gubernamentales, por el Gobierno de Indonesia o por antiguos altos cargos del Estado tailandés. Tras aproximadamente un año de contactos exploratorios entre la entonces primera ministra, Yingluck Shinawatra, y algunos movimientos insurgentes, a principios de 2013 se iniciaron conversaciones públicas y formales entre el Gobierno y el grupo armado BRN, con la facilitación del Gobierno de Malasia. Tales negociaciones fueron interrumpidas por el golpe de Estado de marzo de 2014, pero la Junta Militar que gobierna desde entonces el país reanudó los contactos exploratorios con varios grupos insurgentes en la segunda mitad del año. En 2015 se hicieron públicas las negociaciones entre el Gobierno y MARA Patani –una organización que agrupa a los principales grupos insurgentes del sur del país–. A pesar de que la insurgencia quisiera abordar las medidas que pudieran resolver los temas nucleares del conflicto (como el reconocimiento de la identidad distintiva del pueblo patani o la concesión de algún grado de autogobierno para las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat), el principal punto de discusión en las fases iniciales del proceso era la conformación de varias zonas de seguridad en las que se pudieran reducir los niveles de violencia y, por tanto, constatar el grado de representatividad de MARA Patani y el compromiso de los grupos insurgentes (especialmente del BRN) hacia el proceso de diálogo.

Aunque siguieron registrándose importantes niveles de violencia en el sur del país, durante el año se reanudaron las negociaciones formales presenciales entre el Gobierno y el grupo armado de oposición BRN e incluso se lograron avances importantes, como un acuerdo sobre las cuestiones sustantivas de la agenda de negociación, la conformación de grupos de trabajo o un compromiso de reducción de la violencia durante el Ramadán. Tras casi dos años en los que la pandemia de la COVID-19 restringió el diálogo a contactos informales, exploratorios y a distancia entre las partes, el 11 y 12 de enero se llevó a cabo en Kuala Lumpur la tercera reunión del proceso de negociación –formalmente denominado Grupo de Trabajo Conjunto-Proceso de Diálogo de Paz en el Sur de Tailandia–, tras las dos que habían tenido lugar en enero y marzo de 2020. En dicha reunión ambas partes discutieron acerca de las tres cuestiones sustantivas de la agenda negociadora: la resolución del conflicto a través de acuerdos políticos; la reducción de la violencia en las tres provincias meridionales de Yala, Pattani y Narathiwat; y la inclusión y participación de la sociedad civil en el proceso de paz a través de varios mecanismos de consultas. Dicho marco negociador había sido discutido a lo largo de 2021 a través de cauces informales y acordado durante un encuentro confidencial e informal entre ambas partes celebrado en Turquía en noviembre de 2021. En la reunión de enero de 2022 se acordó el establecimiento de comités mixtos para cada uno de los tres aspectos sustantivos de la negociación para generar espacios de trabajo más flexibles y continuos entre las partes, así como la definición de los términos de referencia y los procedimientos de implementación de cada uno de estos tres mencionados temas. Cabe destacar que, como respuesta a las reiteradas demandas por parte del BRN de contar con algún tipo de observación internacional del proceso, ambas partes acordaron la designación de cinco personas expertas que observan y acompañan el proceso, aunque solamente dos de ellas estuvieron presentes en Kuala Lumpur.

A pesar de que en los meses de enero, febrero y marzo se produjeron numerosos enfrentamientos entre las partes, el 31 de marzo y el 1 de abril se llevó a cabo la cuarta reunión oficial del proceso de negociación, también en Kuala Lumpur y bajo la facilitación del Gobierno de Malasia. Cabe destacar que, por primera vez, un miembro del ala militar del BRN, Deng Awaeji, participó en la reunión, un hecho que algunos medios interpretaron como un intento del BRN de trasladar públicamente una imagen de unidad interna y también de demostrar a Bangkok un mayor compromiso de la facción armada del movimiento secesionista con el proceso de negociación. En esta reunión, ambas partes formalizaron los puntos sustantivos de la agenda negociadora, oficializados como Principios Generales del Proceso de Diálogo de Paz. Además de reducir los niveles de violencia y de fomentar las consultas públicas en el sur del país sobre los contenidos del proceso de paz, ambas partes se comprometieron a buscar soluciones políticas de acuerdo con la voluntad de la

comunidad patani bajo el estado unitario de Tailandia de conformidad con la Constitución. Previamente, el facilitador malasio de las negociaciones, Abdul Rahim Noor, había señalado que se había discutido la creación de una región autónoma en el sur del país (Patani Darussalam), mientras que el jefe negociador del BRN, Anas Abdulrahman (alias Hipni Mareh), había declarado que ambas partes accedieron a centrar el diálogo en torno a los temas de gobernanza, educación, sistema económico y reconocimiento de la identidad malaya patani. En la cuarta ronda de negociación, el Gobierno y el BRN también acordaron la llamada Iniciativa de Paz de Ramadán, consistente en reducir la violencia durante el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 14 de mayo. Además, ambas partes acordaron que las personas del BRN en prisión pudieran pasar la fiesta musulmana del Eid en su casa y que los miembros del BRN que actúan en la clandestinidad pudieran regresar a sus hogares durante el Ramadán sin ser detenidos (siempre y cuando no portaran armas ni llevaran a cabo ataques). A tal efecto, el Gobierno y el BRN conformaron un grupo de trabajo para supervisar la reducción de la violencia durante dicho periodo. En términos generales, los términos del acuerdo de reducción de la violencia fueron respetados, aunque se registraron algunos episodios de violencia. Además, a mediados de abril, Kasturi Mahkota, el líder del PULO –uno de los grupos armados que ha operado en la región en las últimas décadas, aunque desde 2016 no ha llevado a cabo acciones armadas significativas– reivindicó la autoría de un doble atentado en la provincia de Pattani para recordar al Estado tailandés que las negociaciones de paz en el sur de Tailandia deberían incluir a los principales grupos armados que operan en la región y no solamente al BRN. En la misma línea, a finales de junio, Makhota declaró que era probable que el PULO se uniera a las negociaciones entre el Gobierno y el BRN. En 2015 se iniciaron unas negociaciones de paz entre el Estado tailandés y MARA Patani, una organización que incluía a los principales grupos insurgentes en el sur del país, entre ellos el BRN. Sin embargo, tales negociaciones finalizaron en 2019 sin acuerdos significativos, poco antes del inicio de un nuevo proceso de negociación entre Bangkok y el BRN en exclusiva.

Tras casi dos años en los que la pandemia de la COVID-19 restringió el diálogo a contactos informales y a distancia entre el Gobierno y el BRN, durante el año se lograron avances importantes en las negociaciones

El 1 y 2 de agosto se llevó a cabo en Kuala Lumpur la quinta ronda de negociación, en la que se abordaron los términos de referencia de los grupos de trabajo conjunto creados en enero –como el de Consulta Pública o el de Reducción de los Actos de Violencia– y en la que el Gobierno propuso una segunda iniciativa de reducción de la violencia del 15 de agosto al 30 de noviembre, rechazada por el BRN por considerar que no había tiempo suficiente para concluir el acuerdo. Sin embargo, el 30 de octubre el BRN emitió una declaración a través de Twitter en la que reiteraba su compromiso con el proceso de paz y con los “Principios generales del proceso de diálogo de paz”. Posteriormente, el centro de investigación International Crisis Group señaló que ambos paneles negociadores se habían reunido en Berlín a principios de diciembre y que los equipos técnicos de ambas delegaciones lo habían hecho en Malasia pocos días más tarde. El BRN emitió un comunicado en el que señalaba que ambas partes estaban trabajando en una hoja de ruta que incluía cuestiones de seguridad y reducción de la violencia, inmunidad legal para los representantes de BRN que llevaran a cabo consultas con sectores de la población civil, o la propuesta del BRN de sistema de gobernanza democrática en el sur del país.

Género, paz y seguridad

En enero, el Gobierno nombró a Rachada Dhnadirek como su representante especial en las negociaciones de paz con el BRN. Según Bangkok, una de sus funciones será promover el rol de las mujeres en dichas negociaciones de paz. Rachada Dhnadirek era portavoz del Gobierno y había ejercido como vicepresidenta del Consejo de Liberales y Demócratas Asiáticos, ejecutiva del Comité Internacional Liberal de Derechos Humanos y miembro del Panel Internacional de Parlamentarias por la Libertad de Religión o Creencia (IPPFoRB). Posteriormente, a mediados de noviembre el Gobierno anunció el nombramiento de una mujer musulmana (Pateemoh Sadeeyamu) como gobernadora de la provincia de Pattani. Pateemoh Sadeeyamu, con una dilatada trayectoria en el Ministerio del Interior, previamente había trabajado en el Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sury había sido vicegobernadora de las provincias de Phatthalung y de Narathiwat.

